

Honorable  
**JUZGADO SESENTA Y SEIS (66) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**  
E. S. D.

**REF.:** **Medio de Control:** Reparación Directa

**Proceso No.** 11001334306620200017600

**Demandante:** Alba Priscila Beltrán García y otros

**Demandados:** Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y otros

**ASUNTO:** **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

**DANIELA BEJARANO ARROYO**, mayor de edad, domiciliada en Montería., identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.067.945.287 de Montería, abogada titulada y en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 323.821 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderada sustituta de **HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.** antes **LIBERTY SEGUROS S.A.** (en lo sucesivo, para abreviar, “HDI”), sociedad comercial, identificada con N.I.T. 860.039.988-0, con domicilio principal en la Calle 72 # 10-07 piso 7 en la ciudad de Bogotá D.C., con correo electrónico de notificaciones judiciales: [co-notificacionesjudiciales@libertycolombia.com](mailto:co-notificacionesjudiciales@libertycolombia.com), entidad sometida al control y vigilada por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, representada legalmente para asuntos judiciales por **KATY LISSET MEJÍA GUZMÁN**, identificado con Cédula de Ciudadanía no. 43.611.733, como lo acredita el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por dicha entidad, acudo ante su despacho para **CONTESTAR LA DEMANDA** presentada ALBA PRISCILA BELTRÁN GARCÍA y OTROS contra AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI Y OTROS.

De igual modo, me permito contestar el llamamiento en garantía propuesto por **SURAMERICANA S.A.** contra **HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.**

Para facilitar la lectura de esta contestación me permito presentar la siguiente Tabla de Contenido:

## TABLA DE CONTENIDO

I.	OPORTUNIDAD PARA CONTESTAR LA DEMANDA .....	3
II.	PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA .....	3
III.	PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA .....	3
IV.	EXCEPCIONES DE MÉRITO FRENTE A LA DEMANDA .....	4
A.	IMPOSIBILIDAD DE ACUDIR AL JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA .....	4
1.	DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN .....	4
2.	CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA .....	5
B.	FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA POR PARTE DE COVIANDINA S.A.S .....	6
C.	INEXISTENCIA DE NEXO CAUSALIDAD DE COVIANDINA S.A.S. ....	7
D.	INEXISTENCIA, AUSENCIA DE PRUEBA, EXCESIVA Y ERRÓNEA TASACIÓN DE LOS DAÑOS PATRIMONIALES .....	8
E.	EXCEPCIÓN GENÉRICA .....	10
	CONFORME A LOS ARTÍCULOS 281 Y 282 DEL C. G. DEL P., CUALQUIER OTRA EXCEPCIÓN CUANDO LOS HECHOS QUE LA CONSTITUYEN APAREZCAN PROBADOS, SOLICITO SEA OFICIOSAMENTE DECLARADA POR EL TRIBUNAL .....	11
V.	PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES FORMULADAS EN EL LLAMAMIENTO DE COVIANDINA CONTRA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. ....	11
VI.	PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO DE COVIANDINA CONTRA SEGUROS GENERALES SURAMERICACA S.A. ....	11
VII.	PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO DE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. CONTRA HDI SEGUROS .....	11
VIII.	PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO DE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. CONTRA HDI SEGUROS .....	12
IX.	EXCEPCIONES CONTRA EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR SEGUROS GENERALES SURAMERICANA CONTRA HDI SEGUROS (ANTES LIBERTY SEGUROS S.A.) .....	12
A.	NECESIDAD DE EXAMINAR EL CASO A LA LUZ DEL CONTRATO DE SEGURO Y LAS DISPOSICIONES QUE LO RIGEN .....	12
B.	FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. PARA LLAMAR EN GARANTÍA A HDI (ANTES LIBERTY). ....	15
C.	APLICACIÓN DE NORMAS DEL CONTRATO DE SEGURO RELATIVAS AL COASEGURO – OBLIGACIÓN CONJUNTA Y NO SOLIDARIA .....	17
D.	AUSENCIA DE DEMOSTRACIÓN DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA .....	18
E.	LIMITACIÓN CONTRACTUAL AL MONTO INDEMNIZABLE Y ALCANCE MÁXIMO DE UNA HIPOTÉTICA CONDENA .....	19
F.	PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGURO .....	19
G.	EXCEPCIÓN GENÉRICA .....	21
X.	PRUEBAS .....	21
XI.	ANEXOS .....	22
XII.	NOTIFICACIONES .....	22

## I. OPORTUNIDAD PARA CONTESTAR LA DEMANDA

De acuerdo con el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, si el Juez haya procedente el llamamiento en garantía, ordenará notificar personalmente al demandado y correrle traslado por 15 días, a partir de la fecha de notificación. Dentro de dicho término, el llamado podrá contestar también la demanda, conforme con lo dispuesto en el artículo 66 del Código General del Proceso, al cual se acude por remisión expresa del artículo 227 del CPACA.

En el presente caso, el llamamiento en garantía fue admitido mediante auto 11 de octubre de 2024. El auto admisorio fue notificado por correo electrónico el 11 de diciembre de 2024, por lo que el término de traslado para contestar el llamamiento conforme lo dispone al artículo 199 de la Ley 1437 de 2011<sup>1</sup>, inició el 16 de diciembre de 2023 y finaliza el 28 de enero de 2024<sup>2</sup>, por lo que la contestación del llamamiento y de la demanda se presenta dentro del término legal establecido para ello.

## II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Actuando en calidad de apoderado de **HDI Seguros S.A. (antes Liberty Seguros S.A.)**, me opongo a todas y cada una de las pretensiones formuladas por la parte actora en la demanda, considerando que no le asiste el derecho invocado y no existe responsabilidad atribuible al asegurado, **Concesionaria Vial Andina S.A.S. (Coviandina S.A.S.)**, que configure los elementos requeridos para sustentar la reclamación. En consecuencia, tampoco puede derivarse obligación alguna de indemnización en cabeza de mi representada.

Adicionalmente, manifiesto que coadyuvo las defensas y excepciones presentadas tanto por **Seguros Generales Suramericana S.A. (Sura)**, quien realizó el llamamiento en garantía, como por **Coviandina S.A.S.**, en todo aquello que no se oponga a los intereses y argumentos de mi representada. Por lo anterior, solicito que se absuelva a mi representada de cualquier responsabilidad y que se condene a la parte actora al pago de costas procesales y agencias en derecho.

## III. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

1. **NO ME CONSTA.** Se trata de un hecho ajeno a mi representada, motivo por el cual me atengo a lo que resulte probado durante el proceso.
2. **NO ME CONSTA.** Se trata de un hecho ajeno a mi representada, motivo por el cual me atengo a lo que resulte probado durante el proceso.

---

<sup>1</sup> De acuerdo con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

<sup>2</sup> Para la contabilización de los términos se debe tener en cuenta, que el 17 de diciembre de 2024 no corrieron términos por ser el día de la rama judicial y la vacancia judicial la cual transcurrió desde el 20 de diciembre de 2024 hasta el 13 de enero de 2025.

3. **NO ME CONSTA.** Se trata de un hecho ajeno a mi representada, motivo por el cual me atengo a lo que resulte probado durante el proceso.
4. **NO ME CONSTA.** Se trata de un hecho ajeno a mi representada, motivo por el cual me atengo a lo que resulte probado durante el proceso.
5. **NO ME CONSTA.** Se trata de un hecho ajeno a mi representada, motivo por el cual me atengo a lo que resulte probado durante el proceso.
6. **NO ME CONSTA.** Se trata de un hecho ajeno a mi representada, motivo por el cual me atengo a lo que resulte probado durante el proceso.
7. **NO ME CONSTA.** Se trata de un hecho ajeno a mi representada, motivo por el cual me atengo a lo que resulte probado durante el proceso.
8. **NO ME CONSTA.** Se trata de un hecho ajeno a mi representada, motivo por el cual me atengo a lo que resulte probado durante el proceso.
9. **NO ME CONSTA.** Se trata de un hecho ajeno a mi representada, motivo por el cual me atengo a lo que resulte probado durante el proceso.
10. **NO ES UN HECHO.** Es una interpretación subjetiva o jurídica planteada por el apoderado de la parte demandante. La decisión sobre este asunto es competencia exclusiva del juez, quien deberá resolverlo con base en las pruebas practicadas y los argumentos presentados por las partes durante el proceso. Por lo tanto, me sujeto a lo que se demuestre dentro del trámite judicial.

#### IV. EXCEPCIONES DE MÉRITO FRENTE A LA DEMANDA

##### A. IMPOSIBILIDAD DE ACUDIR AL JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

###### 1. De la caducidad de la acción

La caducidad de la acción es el fenómeno procesal en virtud del cual el administrado pierde la posibilidad de demandar un acto administrativo o reclamar en la vía jurisdiccional las consecuencias jurídicas de un hecho, una omisión o una operación administrativa, fenómeno que se da por la concurrencia de dos supuestos: el transcurso del tiempo y el no ejercicio de la acción, establecido en nuestro ordenamiento jurídico por razones de seguridad jurídica e interés general<sup>3</sup>.

Tal fenómeno jurídico ha sido explicado por el Consejo de Estado de la siguiente manera:

*“Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador colombiano instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales, no se ejercen en un término específico. Las partes*

---

<sup>3</sup> JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE, Derecho Procesal Administrativo, Edit. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., 7ª edición, 2010, pág. 111.

*tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley, y de no hacerlo en tiempo perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. El fenómeno de la caducidad busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso. Por esta razón, la efectividad del derecho sustancial que se busca con su ejercicio puede verse afectada. La doctrina ha desarrollado las características propias de esta figura para intentar delimitarla y diferenciarla con la prescripción extintiva de corto plazo. La caducidad, a diferencia de la prescripción, no admite suspensión salvo la excepción consignada con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, consagrada en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.”<sup>4</sup>*

En sentencia del 10 de abril de 2019 el Consejo de Estado reiteró:

*“El fenómeno de la caducidad es un presupuesto procesal de carácter negativo que opera en algunos medios de control contenciosos por el transcurso de un término establecido expresamente en la ley, término que una vez cumplido restringe la posibilidad de acceder a la administración de justicia. De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el propósito esencial de la caducidad es evitar que las diversas situaciones generadoras de responsabilidad se extiendan de manera indefinida en el tiempo, brindando así seguridad jurídica al transformarlas en situaciones consolidadas. Entonces, como la caducidad opera de pleno derecho, pues su plazo no es susceptible de interrupción ni de suspensión por pacto entre las partes, su configuración implica que el demandante pierde la facultad de accionar ante la jurisdicción por no haber ejercido oportunamente su derecho y concurrir dos supuestos: el transcurso del tiempo y; el no ejercicio de la acción. Dicho término está edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo e invariable para que quien considere ser titular de un derecho opte por accionar o no”<sup>5</sup>. (Negrilla y subraya nuestras).*

## 2. Caducidad del Medio de Control de Reparación Directa

El medio de control de reparación directa se encuentra regulado en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el cual establece que en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, se puede exigir directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. En consonancia con esta disposición, el artículo 164 numeral 2 literal i) del CPACA establece con precisión que la demanda de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño.

En el caso que nos ocupa, el hecho generador del daño corresponde al fallecimiento del señor JORGE RAMIRO BELTRÁN GARCÍA, ocurrido el 15 de enero de 2018 como consecuencia del colapso del

<sup>4</sup> Auto proferido el 21 de mayo de 2008. Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO. Radicación número: 05001-23-31-000-2007-00623-01(34781).

<sup>5</sup> Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 10 de abril de 2019, expediente no. 58743. C.P. Ramito Pazos Guerrero. Providencia en Igual Sentido

Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencias de 22 de julio de 2009, [Exp. 17552](#); de 16 de julio de 2015, [Exp. 40325](#); Autos de 14 de agosto de 2013, Exp. 45191; de 19 de febrero de 2004, [Exp. 24427](#); de 05 de marzo de 2015, [Exp. 49307](#)

puente Chirajara. Siendo la muerte un daño de carácter instantáneo, el término de caducidad debe computarse a partir del día siguiente a su ocurrencia, esto es, desde el 16 de enero de 2018. Por lo tanto, el término legal de dos años para interponer el medio de control vencía el 16 de enero de 2020.

No obstante, al examinar el expediente se evidencia que la demanda fue radicada hasta el 11 de agosto de 2020, es decir, aproximadamente siete meses después de vencido el término de caducidad establecido en la ley. Esta presentación extemporánea de la demanda configura de manera inequívoca el fenómeno jurídico de la caducidad, el cual, al ser de orden público, no es susceptible de interrupción o suspensión.

Es importante señalar que si bien los demandantes argumentan que el término debería contarse desde la fecha en que se conocieron las causas técnicas del colapso del puente, esta interpretación contradice el tenor literal del artículo 164 del CPACA, que es claro al establecer que el término se cuenta desde la ocurrencia del hecho dañoso cuando este es de carácter instantáneo, como lo es el fallecimiento de una persona. El conocimiento posterior de las causas técnicas que originaron el hecho no modifica el momento de configuración del daño ni altera el término de caducidad establecido en la ley.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho declarar probó la excepción de caducidad del medio de control, toda vez que entre la fecha del hecho dañoso (15 de enero de 2018) y la presentación de la demanda (11 de agosto de 2020) transcurrió un término superior a los dos años establecidos en el artículo 164 numeral 2 literal i) del CPACA, lo que impone el rechazo de las pretensiones de la demanda por haber configurado el fenómeno jurídico de la caducidad.

## **B. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA POR PARTE DE COVIANDINA S.A.S**

COVIANDINA S.A.S. no tiene legitimación en la causa por pasiva para resolver el petitum elevado en su contra, pues conforme a los elementos fácticos, probatorios y legales no le asiste la facultad sustancial para que se ejerza tal solicitud por la parte actora, como pasará a verse.

La legitimación en la causa ha sido definida por la jurisprudencia constitucional como *“la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material”*<sup>6</sup>. De ahí que, *“cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión de fondo, o en caso de que ello ocurra, la misma no puede resultar favorable a los intereses procesales de aquella.”*<sup>7</sup> Concepto que ha sido definido por la doctrina como *“respecto del demandado ser la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante”*.<sup>8</sup>

Precisando el alcance de este concepto, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que:

*“La legitimación en la causa, es asunto propio del derecho sustancial, que no procesal, constituyendo uno de los presupuestos de la acción que guarda relación directa con la pretensión del demandante, y específicamente con una sentencia favorable a la misma. Esta es en el*

<sup>6</sup> Corte Constitucional. Sentencia T-416 de 1997. M.P. Antonio Barrera Carbonell.

<sup>7</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

<sup>8</sup> Devis Echandía, Hernando. Teoría General del Proceso, Tomo I. Biblioteca Jurídica Dike, 1994. MedellínColombia. Pág. 270



*demandante, la calidad de titular del derecho subjetivo que invoca; y en el demandado, la calidad de obligado a ejecutar la obligación correlativa. (G.J. CXXXVI, p. 14).<sup>9</sup> Resaltado fuera del texto*

Igualmente, en doctrina se encuentra que **“la legitimación solo existe cuando demanda quien tiene por ley sustancial facultad para ello, precisamente contra la persona frente a la cual la pretensión de que se trata tiene que ser ejercitada. De modo que la cualidad en virtud de la cual una pretensión puede y debe ser ejercitada contra una persona en nombre propio se llama legitimación para obrar, activa para aquel que puede perseguir judicialmente el derecho y pasiva para aquel contra el cual esta se hace valer.”**<sup>10</sup> (Subrayado y negrilla propio).

Se advierte que, no hay sustento fáctico y jurídico para determinar que COVIANDINA S.A.S. está legitimada en la causa por pasiva para que se ejerciten en su contra las pretensiones enrostradas por el demandante, puesto que: Coviandina S.A.S. no tiene ninguna relación jurídica o contractual con el señor Jorge Ramiro Beltrán García, ya que su objeto social está limitado exclusivamente a las actividades del contrato de concesión No. 005 de 2015, relacionado con la ejecución de la calzada Chirajara-Fundadores y el mantenimiento del corredor Bogotá-Villavicencio, sin incluir la construcción del Puente Chirajara.

Por otro lado, la relación laboral del señor Beltrán García estaba directamente vinculada con Gisaico S.A., empresa subcontratada por Coninval S.A. para la construcción del puente, dentro del marco de un contrato EPC con Coviandes S.A.S., sociedad diferente a Coviandina S.A.S. En consecuencia, no existe sustento jurídico para atribuir responsabilidad a Coviandina S.A.S. por los hechos relacionados con el accidente.

Por lo anterior, solicito al despacho declarar probada esta excepción y desvincular a Coviandina S.A.S. del presente proceso.

### C. INEXISTENCIA DE NEXO CAUSALIDAD DE COVIANDINA S.A.S.

El nexo de causalidad no es otra cosa que la causalidad jurídica que existe entre el daño y la conducta del sujeto que supuestamente lo ocasiona. *“Así las cosas, si el daño no puede ser atribuido al demandado, éste debe ser necesariamente exonerado, pues cada uno debe ser juzgado de acuerdo con sus actos y omisiones.”*<sup>11</sup>

Al respecto el Consejo de Estado ha manifestado que<sup>12</sup>:

*“(…)es imperativo afirmar que en los casos en los que se reprocha una acción estatal, para que sea efectivo el juicio de responsabilidad extracontractual es indispensable comprobar la relación de causalidad fáctica entre una actividad y un daño, y que este último sea jurídicamente imputable a la entidad.”*

Al respecto la doctrina ha sostenido que:

<sup>9</sup> Corte Suprema de Justicia. Sentencia publicada en G.J. CXXXVI, p. 14. Citada por Tribunal Superior. Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil. 4 de diciembre de 2010. Rad. No.110013103028200300595 02

<sup>10</sup> Hernando Morales M, Curso de Derecho Procesal Civil-Parte General, sexta edición, Editorial ABC-Bogotá, página 141.

<sup>11</sup> SUESCÚN MELO, Jorge. Ibíd. P. 154.

<sup>12</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia de 03 de Octubre de 2016. MP: Ramiro Pazos Guerrero. Exp. 40057.

*“En efecto, causalidad jurídica significa que el hecho le es imputable jurídicamente al demandado” (...) “Puede suceder que aunque haya causalidad física no haya sin embargo, causalidad jurídica. En efecto, el derecho de la responsabilidad civil tiene establecido que cuando el agente causa daño físicamente, pero su conducta está determinada por una causa extraña, estaremos frente a la ruptura del nexo causal y, por tanto, se considera que jurídicamente el daño no ha sido causado por el agente.” (...)” Finalmente puede haber causalidad jurídica aunque no haya causalidad física. (...) O mejor dicho: se produce el daño justamente por la ausencia total de participación física por parte del agente” (No rompe la cadena causal y por tanto se produce el daño)”<sup>13</sup>*

Adicionalmente, la doctrina ha expresado que *“a la víctima le corresponde probar que el daño por ella sufrido es el comportamiento ilícito del agente, es decir, que éste último, por sí mismo o por interpuesta persona, cosa o actividad, bajo su responsabilidad causó el perjuicio.”*<sup>14</sup>

En el caso concreto, luego de haberse realizado un análisis de los medios de prueba portados a la demanda, se advierte que no existe medio de prueba que acredite que la causa eficiente del accidente fue por la conducta activa u omisiva de COVIANDINA.

Es importante destacar que la prosperidad de una condena contra Coviandina requiere que la parte actora acredite de manera inequívoca la existencia de una falla del servicio atribuible a esta concesionaria. Esta exigencia probatoria no ha sido satisfecha dentro del proceso, pues no se ha demostrado que Coviandina hubiera incurrido en alguna conducta reprochable relacionada con los hechos objeto de la litis.

Por lo anterior, la única decisión jurídicamente viable es negar las pretensiones formuladas contra Coviandina, toda vez que en el expediente no obran elementos probatorios que permitan establecer los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios para declarar su responsabilidad en el presente caso.

#### **D. INEXISTENCIA, AUSENCIA DE PRUEBA, EXCESIVA Y ERRÓNEA TASACIÓN DE LOS DAÑOS PATRIMONIALES**

El artículo 1757 del Código Civil, en relación con la carga probatoria, determina que le *“Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”*, disposición que se reitera en el Código General del Proceso, artículo 167, según el cual *“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”*.

Así las cosas, es deber de los demandantes demostrar los perjuicios solicitados y su cuantía. En el presente caso, no se encuentra satisfecha dicha carga probatoria, en tanto no obra prueba determinante que permita verificar la existencia de los perjuicios solicitados. En efecto, los daños materiales e inmateriales solicitados no están demostrados, están sobrestimados y son improcedentes como se verá a continuación:

#### **Daño moral:**

<sup>13</sup> TAMAYO JARAMILLO, Javier. Óp. Cit. P. 249.

<sup>14</sup> Ibíd. P. 253.



El Consejo de Estado, en sentencia del 29 de octubre de 2018 (Exp. 46864)<sup>15</sup>, ha definido el perjuicio moral como aquel que se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y, en general, los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor y zozobra que invadan a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico. Este tipo de perjuicio, por su naturaleza inmaterial y subjetiva, requiere de una especial valoración y acreditación cuando se trata de víctimas indirectas que no se encuentran en el primer o segundo grado de consanguinidad con la víctima directa.

En el caso particular de los sobrinos demandantes, quienes se encuentran en el tercer grado de consanguinidad con el señor JORGE RAMIRO BELTRÁN GARCÍA (qepd), la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido claramente que no basta con la acreditación del parentesco, sino que se requiere la prueba efectiva de la relación afectiva y el dolor moral padecido. Esta exigencia probatoria adicional encuentra su fundamento en la necesidad de demostrar que el vínculo afectivo trascendía la mera relación familiar y se materializaba en una verdadera cercanía emocional que justifica la indemnización pretendida.

Los sobrinos demandantes son:

1. ALIX MERCEDES YATE BELTRÁN (CC 1.121.921.932)
2. ARVEY DIOVANNI BELTRÁN MORA (CC 86.087.384)
3. ARNOTH YUCETH LARA BELTRÁN (CC 1.121.848.213)
4. AYDEE YATE BELTRÁN (CC 40.329.587)
5. BEYANID BELTRÁN VELÁSQUEZ (CC 1.071.303.057)
6. DAVINSON ANDRÉS AYA BELTRÁN (CC 1.121.396.443)
7. DERLY SULEY BELTRÁN MORA (CC 1.121.948.334)
8. DORA BRIGITH LADINO BELTRÁN (CC 1.121.396.036)
9. EDWIN EDUARDO BELTRÁN VELÁSQUEZ (CC 1.121.834.872)
10. ELISA JOHANA YATE BELTRÁN (CC 1.121.857.150)
11. FANNY ROCIO LARA BELTRÁN (CC 40.189.159)
12. FAVIÁN EXNEYDER BELTRÁN VELASQUEZ (CC 1.121.910.981)
13. FRANKLIN OSWALDO AYA BELTRÁN (CC 1.121.396.320)
14. HEIDY YICELA LADINO BELTRÁN (CC 1.023.014.918)
15. JAZBEIDY LARA BELTRÁN (CC 40.216.089)
16. KELLY SHIRLEY BELTRÁN MORA (CC 1.121.835.811)
17. LIDY MARBEY BELTRÁN VELÁSQUEZ (CC 1.121.396.008)
18. LUZ YANETH YATE BELTRÁN (CC 30.082.520)
19. MARÍA ELVIA GARCÍA BELTRÁN (CC 21.185.095)
20. MARÍA STELLA YATE BELTRÁN (CC 1.121.822.980)
21. MARLEN YORLENY BELTRÁN VELASQUEZ (CC 1.121.396.162)
22. MARÍA YOLANDA GARCÍA BELTRÁN (CC 1.121.891.757)
23. NELSON ISIDRO YATE BELTRÁN (CC 86.069.888)
24. ORLANDO LADINO BELTRÁN (CC 3.274.906)
25. RODRIGO LADINO BELTRÁN (CC 121.396.033)
26. RUBI LILIANA BELTRÁN VELASQUEZ (CC 1.121.910.982)
27. TITO FERNEY LADINO BELTRÁN (CC 3.274.837)

---

<sup>15</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de octubre de 2018, Exp. 46864, CP Marta Nubia Velásquez Rico.

Al examinar el material probatorio aportado por los 27 sobrinos demandantes anteriormente listados, se evidencia que estos se han limitado a acreditar su parentesco mediante los correspondientes registros civiles, sin aportar elemento probatorio alguno que demuestre la existencia de una relación afectiva cercana con su tío fallecido. No se han allegado fotografías, documentos o cualquier otro medio de prueba que permita establecer la convivencia, la cercanía afectiva o el impacto emocional que el fallecimiento del señor BELTRÁN GARCÍA provocó en sus sobrinos.

Esta ausencia probatoria cobra especial relevancia cuando se contrasta con la tabla de reparación del daño moral en caso de muerte establecida por el Consejo de Estado<sup>16</sup>, que para el nivel 3 de cercanía afectiva (donde se ubican los sobrinos) exige no solo la demostración del parentesco, sino también la prueba de la relación afectiva real. Los demandantes pretenden el reconocimiento de 25 SMMLV para cada sobrino, pero no han satisfecho la carga probatoria que la jurisprudencia exige para acceder a tal reconocimiento.

No puede el juez presumir la existencia del perjuicio moral por el solo hecho del parentesco en tercer grado, pues ello desconocería la línea jurisprudencial que ha construido el Consejo de Estado precisamente para evitar el reconocimiento automático de indemnizaciones sin el debido soporte probatorio. La tasación del perjuicio moral, como lo señala la jurisprudencia, debe fundamentarse en la naturaleza y gravedad de la aflicción demostrada en cada caso concreto.

Al respecto expresamente se ha pronunciado el Consejo de Estado indicando que:

“La Sala reitera que es lo común, lo esperable y comprensible que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando se produce la muerte de un ser querido; asimismo, la tasación de este perjuicio, de carácter inmaterial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, con fundamento en su prudente juicio, establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza y gravedad de la aflicción y sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en cada proceso (...)”<sup>17</sup>

Por lo anterior, solicito al despacho declarar probó la excepción de falta de legitimación en la causa por activa respecto de los sobrinos demandantes, toda vez que no han acreditado el elemento esencial que les otorgaría el derecho a reclamar la indemnización pretendida: la existencia real y probado del perjuicio moral derivado del fallecimiento de su tío.

## E. EXCEPCIÓN GENÉRICA

<sup>16</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, acta del 28 de agosto de 2014, referentes para reparación de perjuicios inmateriales.

<sup>17</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de octubre de 2018, Exp. 46864, CP Marta Nubia Velásquez Rico.

Conforme a los artículos 281 y 282 del C. G. del P., cualquier otra excepción cuando los hechos que la constituyen aparezcan probados, solicito sea oficiosamente declarada por el Tribunal.

**V. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES FORMULADAS EN EL LLAMAMIENTO DE COVIANDINA CONTRA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**

Me opongo a todas y cada una de las posibles o hipotéticas pretensiones que se pretendan alcanzar por la llamante en garantía, pues en el presente caso, los supuestos fácticos **no se adecúan** a las condiciones y supuestos fácticos necesarios para la afectación del **Seguro de Responsabilidad Civil Derivado de Cumplimiento No. 0425673-1**.

De esta manera, solicito al Señor Juez dar estricta aplicación a los términos del contrato de seguro, que delimitan de manera clara y expresa el riesgo cubierto, y, en consecuencia, absolver de toda forma de responsabilidad a mi poderdante.

**VI. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO DE COVIANDINA CONTRA SEGUROS GENERALES SURAMERICACA S.A.**

Previo a dar respuesta, se advierte que el llamante en garantía no realizó la enumeración de los hechos conforme los presupuestos establecidos en el artículo 82 del Código General del Proceso, el artículo 162 y 225 del CPACA y demás normas concordantes, por lo que se procede a contestar los hechos así:

- 1) **ES CIERTO.** Los hechos relacionados con la afirmación respecto a la vinculación de Coviandina al proceso que nos atañe, para que responda por los perjuicios causados por la caída del puente atirantado de Chirajara.
- 2) **NO ES CIERTO EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS.** Respecto a los hechos de la póliza emitida por Seguros Generales Suramericana S.A. nos circunscribimos a lo expresado literalmente por suramericana *“Seguros Generales Suramericana S.A. y la Concesionaria Vial Andina S.A.S. suscribieron la Póliza de Responsabilidad Civil derivada de cumplimiento No. 0425673-1, cuyo objeto consiste en amparar los perjuicios derivados de lesiones, muerte o daños materiales a terceros con ocasión de la ejecución del contrato No. 005 de 2015.”*
- 3) **NO ES UN HECHO Y NO ES CIERTO.** Con relación a las coberturas en caso que se declare la responsabilidad del asegurado en el presente caso. No es cierto que, en caso de una condena en contra de COVIANDINA, automáticamente SURA debe concurrir al pago de la condena. Más allá de eso, el Juez deberá examinar si, a la luz de las estipulaciones contractuales, exclusiones y demás condiciones pactadas, resulta procedente afectar la póliza. De igual forma, no todos los conceptos solicitados por la parte actora son objeto de cobertura de tales pólizas, como se verá a continuación.

**VII. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO DE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. CONTRA HDI SEGUROS**

HDI SEGUROS SA se opone al llamamiento en garantía efectuado por Seguros Generales Suramericana SA, toda vez que la aseguradora líder carece de legitimación para vincular a las coaseguradoras al proceso. En efecto, el contrato de coaseguro no otorga facultades de representación entre las compañías aseguradoras, siendo cada una responsable únicamente por su porcentaje de participación en el riesgo. Por lo tanto, el llamamiento en garantía solo podía ser efectuado por el asegurador Coviandina SAS, quien tenía la calidad de tomador y asegurado en la póliza de responsabilidad civil. Al haber prescrito la acción del asegurado contra la coaseguradora HDI SEGUROS SA, Suramericana no puede subsanar dicha prescripción mediante un llamamiento en garantía para el cual carece de legitimación.

#### **VIII. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO DE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. CONTRA HDI SEGUROS**

**FRENTE AL HECHO PRIMERO: ES CIERTO.**

**FRENTE AL HECHO SEGUNDO: ES CIERTO.**

**FRENTE AL HECHO TERCERO: ES CIERTO.**

**FRENTE AL HECHO CUARTO: ES CIERTO.**

**FRENTE AL HECHO QUINTO: ES CIERTO.**

**FRENTE AL HECHO SEXTO: ES CIERTO**, sin embargo que se advierte que, el Juez deberá examinar si, a la luz de las estipulaciones contractuales, exclusiones y demás condiciones pactadas, resulta procedente afectar la póliza. De igual forma, no todos los conceptos solicitados por la parte actora son objeto de cobertura de tales pólizas, como se verá a continuación.

#### **IX. EXCEPCIONES CONTRA EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR SEGUROS GENERALES SURAMERICANA CONTRA HDI SEGUROS (ANTES LIBERTY SEGUROS S.A.)**

##### **A. NECESIDAD DE EXAMINAR EL CASO A LA LUZ DEL CONTRATO DE SEGURO Y LAS DISPOSICIONES QUE LO RIGEN**

La eventual e improbable condena de COVIANDINA en favor de los demandantes no implica la afectación automática e ilimitada de la póliza de la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. ni mucho menos de las coaseguradoras, entre ellas HDI (antes LIBERTY), pues la misma se encuentra sujeta a determinados amparos, valores asegurados, exclusiones y otras. **Aunado a ello, desde ya se destaca que quien tiene legitimación en la causa por activa para llamar en garantía es el asegurado COVIANDINA, el cual guardó silencio y no llamó a mi representada HDI, lo que torna improcedente cualquier condena en su contra.**

En ese orden, la eventual responsabilidad que le pueda incumbir a SURAMERICANA, a HDI y a las demás coaseguradoras está claramente delimitada por el contrato de seguro celebrado, vínculo jurídico que según el artículo 1602<sup>18</sup> del Código Civil es ley para las partes. Las obligaciones frente a las cuales se puede derivar una eventual responsabilidad de la aseguradora no emanan directamente

<sup>18</sup> Código Civil, artículo 1602: Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.

de los sucesos de los cuales se predica la responsabilidad civil del asegurado sino del contrato de seguro.

De lo anterior, debe quedar claro que en este proceso nos encontramos ante relaciones jurídicas distintas que no pueden confundirse: (i) la de los demandantes con COVIANDINA; (ii) la de esta última con la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., (iii) la de COVIANDINA con HDI, la cual deberá examinarse exclusivamente a la luz del contrato de seguro y de la normativa que regula este contrato y (iv) la de COVIANDINA con cada una de las demás coaseguradoras.

En consecuencia, en las relaciones del asegurado con cada coaseguradora habrá que ceñirse al alcance del riesgo asegurado, las exclusiones establecidas en la póliza, a su vigencia, valores asegurados, límites de la indemnización, y, en general, a lo que se establece en las condiciones generales y particulares de la póliza y en los documentos que forman parte de ella, y en las normas legales que regulan el contrato de seguro.

En efecto, el artículo 1056 del Código de Comercio establece al respecto:

*“Con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurada, el patrimonio o la persona del asegurado.”*

La Corte Suprema de Justicia ha expresado que la relación entre la víctima y la compañía de seguros como consecuencia de la celebración de un contrato de seguro de responsabilidad civil, se encuentra regida por el contenido de ese negocio jurídico y por las normas especiales que regulan este tipo de seguro en el C. de Co. Al respecto ha sostenido que:

*“...Conviene insistir una vez más que en lo tocante con la relación externa entre asegurador y víctima, la fuente del derecho de ésta estriba en la ley, que expresa e inequívocamente la ha erigido como destinataria de la prestación emanada del contrato de seguro, o sea, como beneficiaria de la misma (artículo 1127 C. de Co.). Acerca de la obligación condicional de la compañía (artículo 1045 C. de Co.), en efecto, ella nace de esta especie de convenio celebrado con el tomador, en virtud del cual aquélla sumirá, conforme a las circunstancias, la reparación del daño que el asegurado pueda producir a terceros y hasta por el monto pactado en el respectivo negocio jurídico, de suerte que la deuda del asegurador tiene como derecho correlativo el de la víctima- por ministerio de la ley para la indemnización de dicho detrimento, llegado el caso. **Con todo, fundamental resulta precisar que aunque el derecho que extiende al perjudicado los efectos del contrato brota de la propia ley, lo cierto es que aquél no podrá pretender cosa distinta de la que eficazmente delimite el objeto negocial, por lo menos en su relación directa con el asegurador, que como tal está sujeta a ciertas limitaciones (...).”**<sup>19</sup> (Negrilla y subrayado propio)*

En igual sentido, el distinguido profesor y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Ignacio Jaramillo, en el laudo arbitral del 15 de diciembre de 2009 que resolvió las diferencias surgidas entre Quala S.A. y Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A., señaló:

<sup>19</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 10 de febrero de 2005. M.P. César Julio Valencia Copete. Expediente: 7173.

*“Y, frente a ello, es claro que una interpretación extensiva de la póliza de seguro, que dilata o expande las arquetípicas coberturas otorgadas y riesgos a los que se ha obligado el asegurador, gravándolo con una carga prestacional mayor a aquella en la que originalmente consintió y por la cual está recibiendo una contraprestación expresada en la prima, implica un trato desigual que coloca a dicho asegurador en una marcada situación de desventaja y, de paso, una vez más, desatiende el axioma del pacta sunt servanda, como quiera que se le está obligando donde no hay pacto y sin contraprestación alguna –precisamente porque la prima se fija de conformidad con los riesgos ciertamente asumidos-.*

*De allí la medida con la que debe proceder el intérprete al momento de ejecutar su granada labor, en orden a evitar desbordamientos o yerros hermenéuticos, por demás comunes cuando se malentiende la función jurídica de la interpretación<sup>20</sup>. De interés, en esta materia, resulta el contenido de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 29 de junio de 2007 que, en lo pertinente, dispuso que:*

*“...cuando el juez so pretexto de interpretación, desnaturaliza abiertamente las convenciones de las partes contratantes, o pretermite al aplicar el contrato alguna estipulación terminante o la sustituye por otra de su invención” (XXV, 429), ajena por completo a lo realmente querido por ellas, norte señero que debe orientar la exigente, a la vez que prudente y cautelosa tarea asignada al intérprete. Ello explica que entre interpretación e invención y alteración, medie una apreciable diferencia. Por eso son términos que denotan actuaciones opuestas entre sí, al punto que, con potísima razón, son antagónicos. El hermeneuta, en tal virtud, no puede equipararse –o creerse- un adivino o un sujeto que, con prescindencia de lo realmente convenido y olvidando su específico radio competencial, adultera –y de paso traiciona- lo pretendido por las partes. Esa no es la conducta que se espera de un juez, quien por más poderes que se le otorguen, sobre todo en los tiempos que corren signados por la presencia de un estado social de derecho, tiene fundados y racionales límites. No en vano, el juzgador no posee una patente de corso para desconocer la realidad negocial, so capa de dictar o estructurar la suya. Quien se comporta de ese modo, olvida que su rol no es el de convertirse en un invasor que impone su ley y su credo, sino en un servidor público imparcial al que se la ha confiado la elevada misión de desentrañar, esclarecer y fijar el genuino alcance de un negocio jurídico celebrado por terceras personas –y no propiamente por él-”<sup>21</sup>.*

<sup>20</sup> Sobre este particular, cumple reiterar lo que la Corte Suprema de Justicia tuvo ocasión de establecer en reciente providencia del pasado 19 de diciembre de 2008, anteriormente citada, a la par que en la providencia del 23 de mayo de 1988, una y otra alusivas a la interpretación del contrato de seguro, ocasión en la que sostuvo que “... no puede el intérprete (...) sustituir indebidamente a los contratantes...” (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de diciembre de 2008). Idea que ha tenido la oportunidad de reiterar en numerosas ocasiones.

La doctrina ha coincidido también en que el intérprete debe guardar una actitud serena, libre de pasiones o de intereses subjetivos en el momento de desarrollar su importante labor de desentrañar el verdadero contenido contractual en un caso determinado; así, el profesor Giorgio Giorgi, enseña que “... el arte de interpretar (...) consiste (...) en disponerse a descubrir la voluntad humana, poniéndose en las condiciones de mente y de corazón más propias para lograr el intento. Inteligencia suficiente por la naturaleza, por estudio y por ejercicio; ánimo sencillo e imparcial, libres siempre de juicios preconcebidos, como de pasiones e intereses; intención de conocer la verdad, estudio diligente (...) el intérprete consagrado al estudio de la verdad y de la justicia concibe el sentimiento y el amor, adquiere el celo, y explayando su espíritu en una atmósfera serena, donde no le ofuscan las nubes de las pasiones, estará seguro de inducir la voluntad de las partes ...”. GIORGI, Giorgio. Teoría de las obligaciones, Reus, Madrid, 1930, V. 4, pág. 184). Luigi Carriota Ferrara, por su parte, sostiene que “... un error dejarse empujar y guiar o dominar por las ideas propias y, se diría, por las propias pasiones en el terreno de la teoría general del negocio, cuando se nos plantea la solución de éste que es el problema central de la interpretación. Lo mejor es partir serenos y carentes de preconceitos ...”. CARRIOTA FERRARA, Luigi. El negocio jurídico, Aguilar, Madrid, 1956, p. 611.

<sup>21</sup> Sobre este particular, ha dicho también la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 14 de agosto de 2000 que “... si la misión del intérprete (...) es la de recrear la voluntad de los extremos de la voluntad contractual, su laborio debe circunscribirse, únicamente, a la consecución prudente y reflexiva del aludido logro, en orden a que su valoración, de índole reconstructiva, no eclipse el querer de los convencionistas, y lo que es más importante, no conduzca a su suplantación, toda vez que ello es lo que desventuradamente hacen algunos juzgadores, quienes enarbolando la bandera hermenéutica, terminan invadiendo la órbita negocial, al punto de que en veces (...) parecen fungir más como contratantes que como intérpretes del contrato, esto es, como invariablemente debe tener lugar, situados en su periferia. Cuán cauteloso entonces debe ser el fallador, para evitar que la intención real de los artífices del negocio respectivo, sea fidedignamente interpretado –y de paso respetada- y de ninguna manera mancillada, o sea, adulterada o falsificada, so capa de buscar, equivocada y forzosamente, la supuesta intención de los que han contratado (...) sin percatarse que procediendo de esa cuestionada manera la conculca y, por consiguiente, a modo de irresoluta secuela, distorsionan el acuerdo negocial, ora porque recortan su extensión, ora porque la aumentan o, incluso, porque lo truequen. De



De manera que para que pueda configurarse la responsabilidad civil de la entidad aseguradora, en virtud de una póliza de responsabilidad civil derivada de cumplimiento, no basta con que el asegurado haya sido condenado. Más allá de ello, el Despacho deberá indagar si a la luz de las estipulaciones del contrato de seguro hay lugar o no a que la aseguradora responda, previa consideración del alcance de los amparos, las exclusiones y demás cláusulas de este.

Por lo anterior, pese a la existencia de la póliza de responsabilidad civil, puede darse el caso donde el asegurado sea condenado y la aseguradora sea relevada de dicho deber debido al contenido del contrato de seguro.

#### **B. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. PARA LLAMAR EN GARANTÍA A HDI (ANTES LIBERTY).**

El llamamiento en garantía efectuado por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA a HDI (antes Liberty) no es procedente, ya que SURA carece de legitimación en la causa por activa para llamar a HDI SEGUROS COLOMBIA S.A., así como esta última carece de legitimación en la causa por pasiva para ser llamada en garantía por dicha aseguradora.

En el *subjudice* no existe una relación fáctica o jurídica que permita a SURA exigir a mi representada el reembolso total (o parcial) del pago que aquella tuviere que hacer como resultado de la sentencia. Ello toda vez que tanto el riesgo asegurable como la obligación condicional de pagar la indemnización contratada por el asegurado según la materialización del siniestro es independiente respecto de cada coaseguradora.

El artículo 64 del Código General del Proceso dispone:

*“Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación”.*

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado así:

*“Respecto de la mencionada figura jurídica, la Corte en fallo de 24 de octubre de 2000, exp. 5387, expuso que [...] “De otro lado, como igualmente lo ha explicado la jurisprudencia, dado que eso es lo que impera la lógica y la técnica de la sentencia, el reembolso o el pago se debe disponer por parte del tercero (llamado), al llamante, denomínese demandante o demandado, que hubo de resultar condenado, pero nunca per saltum a quien no fue el citante, porque se trata de relaciones jurídicas perfectamente diferenciables: la del demandante con el demandado y la del llamante con el tercero<sup>1</sup>. Necesítase, dice la Corte, ‘que el llamante sea condenado como consecuencia de la demanda que se dirigió contra él; y que el llamado esté obligado por ley a resarcirlo de este mismo riesgo, o que, previamente haya contratado tal resarcimiento’ (Sent. de 28 de septiembre de 1977). Desde luego que la técnica de la decisión no puede ser distinta,*

ahí que so pretexto de auscultar la voluntad de los contratantes, no puede el intérprete desfigurar el texto del contrato, máxime si éste, justamente, la recoge con fidelidad ...” (se subraya). Cfr. Sentencia del 27 de agosto de 1971, CCLV, 568.

*porque necesariamente el llamamiento en garantía, que implica la proposición de una novedosa pretensión del llamante frente al llamado, conduce a la aparición de un proceso acumulativo, justificado, como ya se dijo, en la economía procesal, que es la que a la postre determina la anticipación de la pretensión de regreso”.<sup>22</sup>Subrayado original, negrilla nuestra.*

En esta medida, para que el llamamiento en garantía sea procedente se exigen dos requisitos: i) que exista un derecho legal o contractual que permita al llamante exigir el resarcimiento de dicha condena al llamado y ii) que el llamante sea condenado como consecuencia de la demanda que se dirigió contra él, siendo tal condena amparada por el llamado.

Descendiendo al caso que nos ocupa, es menester tener en cuenta que nos encontramos ante un coaseguro respecto de la póliza N. 0425673-1. Tal figura jurídica es definida como la *"distribución horizontal o primaria de los riesgos. Mediante este sistema, un conjunto de compañías, entre las cuales no median relaciones recíprocas de aseguramiento, asumen responsabilidades individuales con respecto a un mismo riesgo".*<sup>23</sup>. Es decir, cada aseguradora conserva una relación jurídica independiente con el asegurado sin que medie solidaridad de ningún tipo entre ellas.

El coaseguro consiste en un fenómeno según el cual *"en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa, acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro."*<sup>24</sup> Así pues, tal distribución implica que el valor de la prima será repartida proporcionalmente a cada aseguradora y, por tanto, cada una solo estará obligada a reconocer la indemnización en el monto que le corresponda, sin que haya lugar a dar aplicación a solidaridad alguna entre ellas conforme al artículo 1092 del Estatuto Mercantil<sup>25</sup>. En los términos de la Sala de Casación Civil de la C.S.J.:<sup>26</sup>

*"El coaseguro constituye una modalidad de coexistencia de seguros, donde un número plural de aseguradores conviene distribuirse entre sí, frente a un asegurado, en una cuota o valores predeterminados, el mismo interés y riesgo asegurados. Este acuerdo debe formalizarse con la anuencia del asegurado, pues por virtud de él se genera una relación asegurativa autónoma con cada uno de los aseguradores, por la cual se obligan a responderle al asegurado por la cuota o valor respectivo del daño indemnizable, constituyendo ella el límite de lo reclamable frente a cada uno de los aseguradores"* Subrayado propio.

Sobre las obligaciones que se derivan del coaseguro, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

*"(...) asumiendo esa compañía por consiguiente únicamente su participación porcentual y una vez recibida la de la otra compañía, entregándola al asegurado, es decir que cada una de las aseguradoras soportaban la indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos (artículos 1092 y 1095 del Código de Comercio)".<sup>27</sup> Resaltado fuera del texto.*

<sup>22</sup> Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil. Sentencia de 8 de agosto de 2013, M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Ref.: Exp. 11001-3103-003-2001-01402-01.

<sup>23</sup> OSSA, Efrén: Teoría General del Seguro – La Institución, Editorial Temis, Bogotá, 1988, p. 99, citado en NARVÁEZ BONNET, Jorge Eduardo: El coaseguro, RIS – Bogotá (Colombia), 37(21): 117-147, julio-diciembre de 2012, p. 119

<sup>24</sup> Código de Comercio, artículo 1095.

<sup>25</sup> Código de Comercio, artículo 1092: En el caso de pluralidad o de coexistencia de seguros, los aseguradores deberán soportar la indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos, siempre que el asegurado haya actuado de buena fe. La mala fe en la contratación de éstos produce nulidad.

<sup>26</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Jose Fernando Ramírez Gómez, Sentencia del 09 de octubre de 1998, Expediente No. 4895.

<sup>27</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Expediente No. 06492, 2001.

En esta medida, nos encontramos ante relaciones jurídicas independientes de las distintas coaseguradoras con el asegurado COVIANDINA y, por tanto, ante responsabilidades individuales de dichas entidades. Ello implica que cada una de ellas responde exclusivamente por el porcentaje que se obligó a asumir, correspondiéndole a HDI el 23,33% del valor asegurado. Sin embargo, nótese que quien tiene la legitimación para efectuar tal llamamiento es el asegurado COVIANDINA S.A.S., quien no se pronunció al respecto en la oportunidad procesal pertinente en los términos del artículo 64 del C.G.P. y se limitó a llamar en garantía a la coaseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. En consecuencia, no le es dable a SURA solicitar la vinculación de mi representada y mucho menos una condena en su contra. No sobra destacar que el coaseguro pactado obra en la carátula de la póliza aportada en el llamamiento:

PARTICIPACIÓN DE COASEGURADORAS		
NOMBRE DE COASEGURADORA	%PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	23,34	177.195.485
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	23,33	177.119.565
LIBERTY SEGUROS S.A.	23,33	177.119.565
SEGUROS ALFA S.A.	30,00	227.757.692

Tal y como ha quedado expuesto, para que exista legitimación en la causa es necesario que SURA pueda reclamar a HDI SEGUROS S.A. el resarcimiento de una hipotética condena en el presente proceso. Sin embargo, como ha quedado evidenciado, entre las coaseguradoras no median relaciones recíprocas de aseguramiento ya que cada compañía asume únicamente su participación porcentual y respecto de tal cuota percibe la respectiva prima. Por tanto, no existe relación jurídica o fáctica que permita a SURA reclamar a HDI el valor de una hipotética condena.

Por los motivos aquí expuestos, solicito al H. Juez se sirva reconocer la improcedencia del llamamiento en garantía efectuado por SURA, derivado de su falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva de HDI. En consecuencia, disponga el rechazo de plano las pretensiones del llamamiento y, por lo mismo, se abstenga de emitir condena alguna contra HDI.

### C. APLICACIÓN DE NORMAS DEL CONTRATO DE SEGURO RELATIVAS AL COASEGURO – OBLIGACIÓN CONJUNTA Y NO SOLIDARIA

Sin perjuicio de los argumentos expuestos en antelación, en el remoto e hipotético caso en que el Despacho considere que SURA si está legitimada por activa para efectuar el llamamiento a HDI y por tanto una eventual condena sea proferida en contra de mi representada, esta deberá sujetarse a los porcentajes dispuestos en la Póliza de Responsabilidad Civil derivada de cumplimiento No. 0425673-1, esta tiene un coaseguro cedido y, tal y como se evidencia en la Carátula de la misma, a HDI antes Liberty Seguros SA únicamente le correspondería asumir el 23,33% del amparo.

Sobre el coaseguro, la H. Corte Suprema de Justicia ha definido el mismo de la siguiente manera:

*“El coaseguro constituye una modalidad de coexistencia de seguros, donde un número plural de aseguradores conviene distribuirse entre sí, frente a un asegurado, en una cuota o valor predeterminados, el mismo interés y riesgo asegurados”.*<sup>28</sup> Resaltado fuera del texto.

Sobre las obligaciones que se derivan del coaseguro, el alto tribunal mencionado ha manifestado:

<sup>28</sup> 1998 Corte Suprema de Justicia-Expediente No. 04895.

*“[...] asumiendo esa compañía por consiguiente únicamente su participación porcentual y una vez recibida la de la otra compañía, entregándola al asegurado, es decir que cada una de las aseguradoras soportaban la indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos (artículos 1092 y 1095 del Código de Comercio)”.*<sup>29</sup> Resaltado fuera del texto.

Conforme a lo mencionado, las obligaciones derivadas del coaseguro son conjuntas, es decir, cada aseguradora está obligada a asumir su porcentaje en el coaseguro y no la totalidad de la obligación, alejándose de las obligaciones solidarias.

Así las cosas, en el improbable paso de que la Póliza de Responsabilidad Civil derivada de cumplimiento No. 0425673-1 sea afectada en el presente proceso, Liberty Seguros SA solo puede ser condenada dentro de los límites máximos determinados en la carátula de póliza en una participación de un 23,33%, siendo la participación restante responsabilidad de las demás coaseguradoras: Seguros Generales Suramericana SA (23,34%), Seguros Comerciales Bolívar SA (23,33%) y Seguros Alfa SA (30%).

En virtud de lo anterior, solicita respetuosamente al H. Juez que, en caso de que la Póliza sea afectada, dé aplicación al porcentaje consignado en el coaseguro cedido.

#### **D. AUSENCIA DE DEMOSTRACIÓN DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA**

El inciso primero del art. 1077 del C. de Co. impone al asegurado la obligación de demostrar la ocurrencia del siniestro. En este caso, al ser los familiares de la víctima quienes efectúan el reclamo, les corresponde la carga de probar la ocurrencia del siniestro y la cantidad de la pérdida.

El arte. 1072 del mismo estatuto señala: *"se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado"*. En el presente caso, el amparo otorgado corresponde a una póliza de responsabilidad civil derivada de cumplimiento No. 0425673-1 expedida por Seguros Suramericana SA como líder, y en la cual Liberty Seguros SA participa en calidad de coaseguradora con un 23.33% de participación, cuyo objeto es cubrir los perjuicios derivados del contrato de concesión No. 005 de 2015 por un valor asegurado de \$36.132.216.178.

Sin embargo, para que se configure el siniestro bajo esta póliza, es necesario que se demuestre que los perjuicios reclamados se derivan directamente del incumplimiento de las obligaciones contractuales del asegurador Coviandina SAS en el marco del contrato de concesión amparado. Como se ha demostrado a lo largo del proceso, Coviandina no tenía a su cargo la construcción del puente Chirajara al momento de su colapso, por lo que no existe un nexo causal entre sus obligaciones contractuales y el siniestro reclamado.

De igual manera, los demandantes han obviado la carga probatoria que imponen las disposiciones mencionadas, pues además de no demostrar la ocurrencia del siniestro en los términos de la póliza,

---

<sup>29</sup> 2001 Corte Suprema de Justicia-Expediente No. 06492

tampoco han acreditado objetivamente la cantidad de los perjuicios reclamados conforme lo exige el contrato de seguro. .

Por lo anterior, solicito al H. Juez declarar probó la excepción de ausencia de demostración del siniestro y su cantidad y, en consecuencia, exonerar a Liberty Seguros SA de cualquier responsabilidad derivada de los hechos objeto de la demanda.

#### **E. LIMITACIÓN CONTRACTUAL AL MONTO INDEMNIZABLE Y ALCANCE MÁXIMO DE UNA HIPOTÉTICA CONDENA**

Como ha quedado expuesto en párrafos anteriores, la responsabilidad de mi poderdante se encuentra delimitada por las disposiciones contenidas en el Contrato de Seguro celebrado, vínculo jurídico que según el artículo 1602 del Código Civil es ley para las partes.

En el hipotético e improbable caso de que se presente una condena contra Liberty, a la hora de valorar el monto es necesario atender a las condiciones de la póliza, con objeto de determinar la limitación contractual al monto indemnizable.

De conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 1089 *ibidem*, la responsabilidad del asegurador va hasta el límite de la suma asegurada, sobre la base de que se demuestre el siniestro y la cuantía de la pérdida, y no puede exceder del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o beneficiario. Adicionalmente, existe otro límite legal a la indemnización, previsto en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual la indemnización no podrá exceder del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario. Ni el seguro puede ser fuente de enriquecimiento para el asegurado, por disposición del artículo 1088 *ibidem*.

En virtud del artículo 1079 del Código de Comercio, *“el asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”*.

Conforme con lo expuesto, solicito respetuosamente al H. Juez tener en cuenta las estipulaciones del contrato de seguro que limitan el monto máximo asegurado por Liberty Seguros.

#### **F. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGURO**

El ordenamiento jurídico contempla la prescripción extintiva como una garantía a la seguridad jurídica y como una expresión del derecho de defensa del deudor en el marco de una relación obligacional. Conforme a esta institución jurídica, el acreedor debe exigir el cumplimiento de una obligación dentro de un término perentorio, so pena de que el deudor pueda alegar la negligencia de su contraparte al demorar en exceso el cobro de su acreencia, y así extinguir dicha obligación. Así, si el acreedor de una obligación deja de exigir la prestación por largo tiempo es de presumir que tal acreencia no le interesa, por lo cual su derecho pierde su razón de ser.

Dejando la mención anterior de lado, debe sostenerse que toda controversia suscitada a partir de un contrato de seguro se sujeta a las normas especiales de dicho contrato, incluyendo el término de prescripción. Con tal claridad, lo ha expuesto la H. Corte Suprema de Justicia:

*“[...] En otras palabras: Todas las acciones que tengan como soporte el contrato de seguro, sea que busquen la satisfacción del derecho, como acontece con la de ejecución, sea que persigan su esclarecimiento o reconocimiento, como sucede con las de naturaleza cognoscitiva, están sometidas inexorablemente a los plazos extintivos que prevé el artículo 1081 del ordenamiento comercial”.*<sup>30</sup> (Subrayado nuestro)

Teniendo claro lo anterior, se debe acudir al artículo 1081 del Código de Comercio que reza:

*Art. 1081. <PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES>. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.*

*La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.*

*La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.*

*Estos términos no pueden ser modificados por las partes”.* (subraya y negrilla nuestra)

Sobre la prescripción aplicable (ordinaria o extraordinaria), la doctrina ha sido enfática en determinar que la misma no está sometida a la voluntad de la víctima o del asegurado:

*“[...] no es que frente a las prescripciones el respectivo interesado pueda acogerse, según su conveniencia, a la ordinaria o a la extraordinaria. El código las regula sobre bases tales, que esa posibilidad de alternativa no es procedente”.*<sup>31</sup>

En igual sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia, adicionando que en cada caso es necesario determinar cuándo el interesado tuvo conocimiento de las circunstancias que dieron lugar a la acción:

*“El artículo 1081 citado, efectivamente, prevé que la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria; que la primera de ellas será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción; mientras que la segunda será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho”.*<sup>32</sup> (Resaltado fuera de texto)

<sup>30</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de marzo de 1989. Citada por SUESCÚN MELO, Jorge. Derecho Privado: Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo. Tomo II. Segunda Edición. Bogotá D.C.: Legis, 2003. P. 629.

<sup>31</sup> LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. cit. p. 443

<sup>32</sup> Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil. Sentencia de 25 de mayo de 2011, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. Ref.:50001-31-03-003-2004-00142-01.



De lo anterior se colige que, estando presente el elemento subjetivo (conocimiento del hecho que da base a la acción), el término de prescripción aplicable es el de dos años (ordinaria).

Teniendo en cuenta lo citado, en el caso objeto de estudio, Coviandina SAS tuvo conocimiento de los hechos el 11 de agosto de 2020, fecha en que fue presentada la demanda y enviada al asegurado conforme a las normas vigentes para la época (Decreto 860 de 2020). Sin embargo, solo presentó llamamiento en garantía contra Seguros Generales Suramericana SA el 16 de junio de 2023, es decir, cuando ya habían transcurrido más de dos años desde que tuvo conocimiento de la reclamación.

El hecho de que posteriormente Suramericana haya llamado en garantía a HDI Seguros SA (antes Liberty Seguros SA) no interrumpe ni modifica el plazo de prescripción, pues la aseguradora líder no estaba facultada para vincular a las coaseguradoras. En otras palabras, si el derecho del asegurado ya estaba prescrito frente a Suramericana, con mayor razón lo está respecto de HDI Seguros SA como coaseguradora.

En consecuencia, solicito al Despacho declarar probó la excepción de prescripción, pues cualquier hipotética cobertura del contrato de seguro ya se habría extinguido desde el 11 de agosto de 2022, sin que se hubiera interrumpido

#### **G. EXCEPCIÓN GENÉRICA**

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 282 del C.G.P. solicito a la H. Juez declarar probada cualquier otra excepción que derive de lo que se pruebe en el curso del presente proceso y que impida que las pretensiones de la demanda prosperen total o parcialmente en contra de Liberty Seguros.

#### **X. PRUEBAS**

Solicito se tengan como pruebas las siguientes:

##### **DOCUMENTALES**

Con fundamento en el artículo 165 del Código General del Proceso, al igual que los artículos 243 y siguientes del mismo estatuto, solicito se tengan como tales las que obran ya en el expediente y las que se aportan con el presente escrito.

- PÓLIZA NÚMERO 0425673-1 que ya obra en el expediente
- Condicionado General que ya obra en el expediente

##### **INTERROGATORIO DE PARTE**

- Solicito se cite y haga comparecer a los demandantes para que rindan declaración sobre los hechos en que funda su demanda y sobre las excepciones planteadas y en este escrito. Puntualmente respecto de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que sucedió el accidente que alega, los perjuicios que se reclaman etc.
- Solicito se cite y se haga comparecer al Representante Legal de COVIANDINA para que rinda declaración sobre los hechos en que funda su demanda y sobre las excepciones planteadas

y en este escrito. Puntualmente respecto de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que sucedió el accidente que alega, los perjuicios que se reclaman etc.

## XI. ANEXOS

1. Poder otorgado por HDI antes Liberty Seguros a Lexía Abogados S.A.S.
2. Certificado de Existencia y Representación legal de HDI expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, que obra en el expediente.
3. Certificado de Existencia y Representación Legal de Lexía Abogados

## XII. NOTIFICACIONES

**HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.:** Dirección de notificación: Calle 72 # 10-07 piso 7 en la ciudad de Bogotá D.C., con correo electrónico a efectos de notificaciones judiciales: [notificacionesjudiciales@hdiseguros.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@hdiseguros.com.co)

**LA SUSCRITA APODERADA:** Dirección de notificación: Calle 110 # 09 – 25 oficina 8 -813 en la ciudad de Bogotá D.C. Recibiré notificaciones en los siguientes correos electrónicos: [daniela.bejarano@lexia.co](mailto:daniela.bejarano@lexia.co) y [jfelipetorresv@lexia.co](mailto:jfelipetorresv@lexia.co)

Atentamente,



DANIELA BEJARANO ARROYO

C.C. No. 1.067.945.287

T.P. No. 323.821 del C.S de la J.

[Daniela.bejarano@lexia.co](mailto:Daniela.bejarano@lexia.co)

## Daniela Bejarano

---

**De:** Daniela Bejarano  
**Enviado el:** miércoles, 11 de septiembre de 2024 3:24 p. m.  
**Para:** Daniela Bejarano  
**Asunto:** RV: 110013343066-2020-00176-00 Alba Priscila Beltrán García y Otros [#SR-13557]  
**Datos adjuntos:** RV\_Contestaci\_C3\_B3n\_a\_la\_demanda\_y\_llamamiento\_en\_garant\_C3\_ADa\_Rad.\_2020-00176-00\_Dte.\_Alba\_Priscila\_Beltr\_C3\_A1n\_Garc\_C3\_ADa\_y\_Otros\_Ddo.\_Concesionaria\_Vial\_Andina\_S.A.S.\_Coviandina\_y\_Otros.msg

---

**De:** Juan Felipe Torres <jfelipetorresv@lexia.co>  
**Enviado el:** martes, 10 de septiembre de 2024 9:19 a. m.  
**Para:** Daniela Bejarano <daniela.bejarano@lexia.co>  
**CC:** Mercedes Martinez <m.martinez@lexia.co>  
**Asunto:** RV: 110013343066-2020-00176-00 Alba Priscila Beltrán García y Otros [#SR-13557]



**Juan Felipe Torres**  
Socio

LEXIA

+ 57 317 655 4145  
jfelipetorresv@lexia.co

Av. Cra 19 #100-45 / WeWork / Of. 08-108/ Bogotá.

---

**De:** NOTIFICACIONES JUDICIALES <[CO-NOTIFICACIONESJUDICIALES@Libertycolombia.com](mailto:CO-NOTIFICACIONESJUDICIALES@Libertycolombia.com)>  
**Enviado:** viernes, 6 de septiembre de 2024 12:18 p. m.  
**Para:** Juan Felipe Torres <[jfelipetorresv@lexia.co](mailto:jfelipetorresv@lexia.co)>  
**Asunto:** Fwd: 110013343066-2020-00176-00 Alba Priscila Beltrán García y Otros [#SR-13557]



Señores

**JUZGADO 66 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRATIVO DE BOGOTA**

E. S. D.

**Referencia: Poder Especial**

**Demandante(s): Alba Priscila Beltrán García y Otros.**

**Demandado(s): Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y Otros**

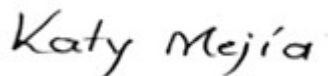
**Radicado: 110013343066-2020-00176-00**

**KATY LISSET MEJÍA GUZMÁN**, domiciliada en Bogotá, D.C., identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 43.611.733 de Medellín, obrando en calidad de Representante Legal de **HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.** con **NIT. 860.039.988 - 0**, sociedad legalmente constituida, con domicilio principal en esta ciudad, tal y como consta en certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, adjunto, confiero poder especial, amplio y suficiente a la firma **LEXIA ABOGADOS S.A.S**, con **NIT. 830.094.544-9**, con domicilio en Bogotá D.C, representada legalmente por **JOSÉ FERNANDO TORRES FERNÁNDEZ DE CASTRO**, identificado con Cédula de ciudadanía No. 12.613.003 de Ciénaga, con correo electrónico [jftorres@lexia.co](mailto:jftorres@lexia.co) y **JUAN FELIPE TORRES VARELA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.020.727.443 de Bogotá D.C., con correo electrónico [jfelipetorresv@lexia.co](mailto:jfelipetorresv@lexia.co), para que en nombre y representación de la mencionada aseguradora actúe en este proceso a través de sus abogados inscritos en el respectivo certificado de existencia y representación legal.

En consecuencia, el apoderado tendrá todas las facultades preceptuadas en el artículo 77 del C.G.P., especialmente las de notificarse, contestar proponiendo las excepciones de ley que considere del caso, transigir, sustituir, reasumir, conciliar, desistir, recibir (salvo títulos judiciales para lo cual se emitirá poder especial), llamar en garantía, vincular a terceros, interponer recursos, proponer incidentes, solicitar y presentar pruebas, contestar llamamientos en garantía que se originen por los hechos de proceso y en general, todas las actuaciones procesales que sean necesarias para la defensa de los intereses de la compañía.

Solicito Señor Juez, reconocer personería para actuar, en los términos del presente poder.

Cordialmente,



**KATY LISSET MEJÍA GUZMÁN**

C. C. No. 43.611.733 de Medellín

Representante Legal.

Acepto,

**JOSÉ FERNANDO TORRES FERNÁNDEZ DE CASTRO**

C.C. No. 12.613.003 de Ciénaga

T.P. No. 30.385 del C.S.J.

**JUAN FELIPE TORRES VARELA**

C.C. No. 1.020.727.443. de Bogotá D.C.

T.P. No. 227.698 del C.S.J.

Oficina Principal Calle 72 N° 10-07 Bogotá, D.C. - Colombia  
**[www.libertyseguros.co](http://www.libertyseguros.co)** NIT. 860.039.988-

---



**Certificado Generado con el Pin No: 2053190960894763**

Generado el 10 de septiembre de 2024 a las 17:57:27

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN  
EL SECRETARIO GENERAL**

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.

**CERTIFICA**

**RAZÓN SOCIAL: HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.**

**NIT: 860039988-0**

**NATURALEZA JURÍDICA:** Sociedad Comercial Anónima De Carácter Privado. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

**CONSTITUCIÓN Y REFORMAS:** Escritura Pública No 8349 del 26 de noviembre de 1973 de la Notaría 3 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Bajo la denominación SKANDIA SEGUROS DE COLOMBIA S.A.

Escritura Pública No 895 del 04 de marzo de 1993 de la Notaría 35 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su denominación por SKANDIA COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.

Escritura Pública No 3343 del 23 de junio de 1998 de la Notaría 18 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su denominación por LIBERTY SEGUROS S.A.

Escritura Pública No 339 del 25 de enero de 1999 de la Notaría 6 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Se protocolizó el acuerdo de fusión, mediante el cual LIBERTY SEGUROS S.A. absorbe a LATINOAMERICANA DE SEGUROS S.A. (antes SEGUROS DEL COMERCIO S.A.), quedando esta última disuelta sin liquidarse.

Escritura Pública No 0986 del 12 de marzo de 2001 de la Notaría 18 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Se protocoliza el acuerdo de fusión por absorción de la COMPAÑÍA DE SEGUROS COLMENA S.A., por parte de LIBERTY SEGUROS S.A. (Resolución 213 del 5 de marzo del 2001 de la Superintendencia Bancaria) En consecuencia, la primera se disuelve sin liquidarse.

Resolución S.B. No 1104 del 26 de septiembre de 2002 La Superintendencia Bancaria aprueba a ABN AMRO SEGUROS (COLOMBIA) la cesión de la totalidad de la cartera de seguros y de algunos activos, pasivos y contratos a favor de LIBERTY SEGUROS S.A.

Escritura Pública No 2173 del 12 de mayo de 2003 de la Notaría 18 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). El domicilio principal de la sociedad es la ciudad de Santa Fé de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, pudiendo establecer sucursales o agencias dentro o fuera del territorio nacional

Escritura Pública No 1027 del 11 de mayo de 2010 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). cambio su denominación por LIBERTY SEGUROS S.A. pudiendo utilizar comercialmente los nombres LIBERTY SEGUROS o LIBERTY

Resolución S.F.C. No 1261 del 24 de septiembre de 2019 ,Aprueba a Liberty Seguros de Vida S.A., realizar una escisión mediante la cual parte de sus activos y pasivos se trasladarán a Liberty Seguros S.A.. sociedad igualmente autorizada para ejercer la actividad aseguradora en el país. Liberty Seguros de Vida S.A. (Sociedad Escidente) y de Liberty Seguros S.A. (Sociedad Beneficiaria), formalizada mediante Escritura Pública No. 1605 del 27 de Septiembre de 2019, Not. 65 de Bogotá D.C.

Escritura Pública No 1922 del 15 de agosto de 2024 de la Notaría 65 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). cambia su razón social de LIBERTY SEGUROS S.A., pudiendo utilizar comercialmente los nombres LIBERTY SEGUROS o LIBERTY por HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.





**Certificado Generado con el Pin No: 2053190960894763**

Generado el 10 de septiembre de 2024 a las 17:57:27

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

**AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:** Resolución S.B. 3568 del 06 de diciembre de 1974

**REPRESENTACIÓN LEGAL:** La representación legal de la Sociedad estará a cargo de un Presidente, de sus suplentes, de uno o más Representantes Legales para Asuntos Judiciales, Extrajudiciales y Administrativos y un Representante Legal para Asuntos Tributarios. Tanto el Presidente, como sus suplentes, así como los Representantes Legales para Asuntos Judiciales, Extrajudiciales y Administrativos y el Representante y el Representante Legal para Asuntos Tributarios, podrán ser Miembros de la Junta Directiva y ser reelegidos indefinidamente. El manejo y la administración de la Sociedad estarán a cargo de un Presidente. El Presidente de la compañía podrá tener, si la junta directiva lo considera necesario, hasta tres suplentes, quienes lo reemplazarán en el caso de faltas temporales, accidentales o absolutas. Para todos los efectos legales se entenderá que la Representación Legal de la Compañía es múltiple y que ella será ejercida indistintamente por el Presidente, por sus Suplentes, por los Representante Legal para Asuntos Judiciales, Extrajudiciales y Administrativos o por el Representante Legal para Asuntos Tributarios y Cambiarios, cada uno de conformidad con sus atribuciones. **FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA:** El Presidente tendrá todas las facultades y obligaciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial las siguientes: A) Ser Representante Legal de la Sociedad ante los Accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y judicial. B) Ejecutar u ordenar todos los Actos y operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes, en estos Estatutos y en las decisiones de la Junta Directiva. C) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, conjuntamente con la Junta Directiva, los estados financieros de fin de ejercicio, junto con un Informe escrito sobre la situación de la Sociedad, y un Proyecto de Distribución de Utilidades. D) Tomar todas las medidas que reclame la conservación y seguridad de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la Sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija el normal desarrollo de la empresa social. E) Convocar la Asamblea General a reuniones ordinarias y extraordinarias cuando lo juzgue necesario o conveniente. F) Convocar a la Junta Directiva a las reuniones ordinarias, con la periodicidad que determinen las normas legales, y a reuniones extraordinarias cuando lo considere necesario o conveniente. G) Presentar a la Junta Directiva, los estados financieros y suministrar todos los balances de prueba e informes que ésta solicite en relación con la Sociedad y sus actividades. H) Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General y la Junta Directiva. I) Delegar parcialmente sus funciones y constituir los apoderados especiales que requiera el buen giro de las actividades sociales. J) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con la existencia, funcionamiento y actividades de la Sociedad. K) Vender o comprar activos fijos diferentes a inmuebles por cuantía hasta de quinientos mil dólares (USD 500.00), en un solo acto o en una serie de actos u operaciones relacionadas. L) Celebrar contratos cuyo valor no sea superior a quinientos mil dólares (USD 500.000) por acto o contrato anual. Esta atribución no se refiere a contratos de adquisición o venta de inmuebles. M) Realizar inversiones de dinero en préstamos a empleados de la Sociedad, que no se encuentren regulados en la Circular de Beneficios y el Manual de Préstamos para Ejecutivos. N) Adquirir o enajenar documentos negociables dentro del mercado institucional de valores que no exceda de diez millones de dólares (USD 10.000.000) en un solo acto o en una serie de actos u operaciones relacionadas. N) Nombrar y remover los empleados de la Compañía. O) Aprobar la creación o supresión de ramos de seguro. **FUNCIONES DEL LOS REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS:** Los Representantes Legales para asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos, de manera separada, tendrán las siguientes funciones: a) Ser Representantes Legales de la sociedad ante las autoridades de la Rama Judicial del Poder Público o, ante autoridades de la Rama Ejecutiva del Poder Público en cualquiera de los órdenes en que se divide territorialmente la república de Colombia y a las cuales les hayan sido asignadas, delegadas o transferidas por disposición normativa, funciones judiciales o funciones que en algún momento eran competencia de funcionarios de la Rama Judicial del Poder Público o ante cualquiera de las ramas del poder público, así mismo ejercerá la representación de la Compañía en cualquier clase de proceso, administrativo, policivo, arbitral o extrajudicial en los que la Sociedad sea parte. b) Asesorar al Presidente para la designación de los apoderados especiales que representen a la sociedad ante las autoridades mencionadas para los fines y objeto del literal anterior. c) Todas aquellas que el Presidente le delegue. d) Otorgar poderes para promover o instaurar demandas, contestar demandas, llamamientos en



**Certificado Generado con el Pin No: 2053190960894763**

Generado el 10 de septiembre de 2024 a las 17:57:27

## **ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

garantía, incidentes, recursos para agotar la vía gubernativa, es decir, el Representante Legal para asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos está facultado para otorgar todo tipo de poder ante cualquier autoridad competente de cualquiera de las ramas del poder público. Además, tendrá la facultad expresa para conciliar en las audiencias de conciliación previstas en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, en la ley 80 de 1993, en la ley 446 de 1998, en el decreto 1818 de 1998 y en las demás normas que modifiquen, adicionen, complementen o reglamenten la anterior normatividad. e) Firmar cartas de objeciones f) firmar contratos de transacción g) Representar a la Compañía en los procesos de responsabilidad fiscal adelantados por la Contraloría General de la República, Contralorías Departamentales, Contralorías Municipales, Contralorías Distritales, h) Otorgar poderes para representar a la Compañía en los procesos de responsabilidad fiscal adelantados por la Contraloría General de la República, Contralorías Departamentales, Contralorías Municipales, Contralorías Distritales. i) Iniciar y llevar a cabo, en nombre de la Sociedad, toda clase de solicitudes, peticiones o trámites ante cualquier autoridad administrativa, policiva o judicial, incluyendo la facultad de interponer cualquier recurso en nombre de la Sociedad. J) Suscribir comunicaciones dirigidas a la Superintendencia Financiera de Colombia y cualquier otra Autoridad Administrativa o de Control en nombre y representación de la sociedad. (Escritura Pública 1003 del 22/09/2020 Not. 65 de Bogotá D.C.) REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS TRIBUTARIOS Y CAMBIARIOS. El Representante Legal para asuntos tributarios tendrá las siguientes funciones: a) Representar a la sociedad, ante terceros y ante toda clase de autoridades, en todos los asuntos de naturaleza tributaria y cambiaria. b) Suscribir y presentar ante todas las autoridades administrativas o judiciales, todos los documentos, formularios y declaraciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de la sociedad en asuntos tributarios y cambiarios. c) Adelantar todas las gestiones necesarias para representar a la sociedad en asuntos tributarios y cambiarios, d) Responder los requerimientos de las autoridades de impuestos. El Presidente, los Representantes Legales para Asuntos Judiciales, Extrajudiciales y Administrativos y el Representante Legal para Asuntos Tributarios y Cambiarios serán nombrados por la Junta Directiva para períodos de dos (2) años. En caso de que la Junta Directiva no manifieste su decisión de removerlos, se entenderán reelegidos por períodos iguales. (Escritura Pública No.0086 del 24 de enero de 2020, Notaria 65 de Bogotá D.C.)

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>CARGO</b>
Cesar Alberto Rodríguez Sepulveda Fecha de inicio del cargo: 27/06/2023	CC - 80231797	Presidente
Katy Lisset Mejia Guzman Fecha de inicio del cargo: 07/05/2020	CC - 43611733	Suplente del Presidente
Noe Moreno Cabezas Fecha de inicio del cargo: 23/07/2020	CC - 79864404	Suplente del Presidente
Maria Juliana Ortiz Amaya Fecha de inicio del cargo: 27/12/2020	CC - 37549452	Representante Legal para Asuntos Judiciales, Extrajudiciales y Administrativos
Katherine Yohana Triana Estrada Fecha de inicio del cargo: 27/12/2020	CC - 25999065	Representante Legal para Asuntos Judiciales, Extrajudiciales y Administrativos
Mauricio Andrés Cleves Calderon Fecha de inicio del cargo: 22/02/2024	CC - 80086662	Representante Legal para Asuntos Judiciales, Extrajudiciales y Administrativos

**RAMOS:** Resolución S.B. No 5148 del 31 de diciembre de 1991 Agrícola (reaseguro), automóviles, aviación, corriente débil, cumplimiento, incendio, lucro cesante, manejo, montaje y rotura de Maquinaria, multirriesgo familiar, navegación, responsabilidad civil, riesgos de minas y petróleos, semovientes, sustracción, terremoto, todo riesgo para contratistas, transportes y vidrios. (con Circular Externa 008 del 21 de abril de 2015 el ramo Agrícola se incorpora en el ramo de Seguro Agropecuario, se elimina el ramo de seguro de semoviente y pasa



**Certificado Generado con el Pin No: 2053190960894763**

Generado el 10 de septiembre de 2024 a las 17:57:27

## **ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

a formar parte del ramo de seguro Agropecuario, Así las cosas, el ramo de seguro Agropecuario estará conformado por los ramos Agrícola, semovientes, así como otros relacionados con recursos naturales, vegetales y animales)

A raíz de la fusión de la COMPAÑIA DE SEGUROS COLMENA S.A. los siguientes ramos de seguros fueron tomados por LIBERTY SEGUROS S.A. compañía absorbente: Resolución 5148 del 31 de diciembre de 1991: agrícola, automóviles, aviación, corriente débil, crédito comercial (con restricciones de acuerdo a la resolución 24 de 1990 de la junta monetaria), cumplimiento, estabilidad y calidad de la vivienda nueva, incendio, lucro cesante, manejo, montaje y rotura de maquinaria, multirriesgo comercial, multirriesgo familiar, multirriesgo industrial, navegación, responsabilidad civil, riesgos de minas y petróleos, seguro obligatorio de accidentes de tránsito, sustracción, terremoto, todo riesgo para contratistas, transportes, vidrios, accidentes personales, colectivo de vida, educativo, exequias, salud y vida grupo.

Resolución 0826 del 30 de junio de 2016 resuelve el recurso de reposición en contra de la Resolución No. 0456 del 16 de abril de 2015: Resolviendo revocar la resolución No. 0456 "Por la cual revoca la autorización concedida a Liberty Seguros S.A. para operar el ramo de seguro de semovientes"

Resolución S.B. No 691 del 14 de julio de 1997 accidentes personales, vida grupo, salud.

Resolución S.B. No 1334 del 16 de diciembre de 1997 seguro obligatorio de accidentes de tránsito

Resolución S.B. No 1217 del 24 de octubre de 2002 enfermedades de alto costo

Circular Externa No 052 del 20 de diciembre de 2002 a) El ramo de multirriesgo comercial se debe explotar según el ramo al cual corresponda cada amparo. b) El ramo de acuicultura se debe explotar bajo el ramo de Semovientes. c) Se elimina el ramo denominado SECAL "Seguro de estabilidad y calidad de la vivienda nueva y usada".

Resolución S.F.C. No 0725 del 22 de mayo de 2007 ramo de Seguro de Desempleo

Resolución S.F.C. No 1711 del 26 de agosto de 2010 Revoca la autorización concedida a Liberty Seguros S.A. para operar el ramo de seguro educativo.

Resolución S.F.C. No 0240 del 08 de febrero de 2013 Revocar la autorización concedida a LIBERTY SEGUROS S.A. para operar el ramo de Aviación

  
**NATALIA GUERRERO RAMÍREZ**

**NATALIA CAROLINA GUERRERO RAMÍREZ  
SECRETARIA GENERAL**

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 13 de enero de 2025 Hora: 09:19:16  
Recibo No. AA25033020  
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A250330208AE7A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: LEXIA ABOGADOS S.A.S  
Nit: 830.094.544-9  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 01139643  
Fecha de matrícula: 14 de noviembre de 2001  
Último año renovado: 2024  
Fecha de renovación: 26 de marzo de 2024  
Grupo NIIF: Grupo II.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Avenida Carrera 19 100 45 Oficina  
08 - 108  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: jftorres@lexia.co  
Teléfono comercial 1: 3103388337  
Teléfono comercial 2: 3153315748  
Teléfono comercial 3: 6015087567

Dirección para notificación judicial: Avenida Carrera 19 100 45 Of 10

123

Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: jfelipetorresv@lexia.co  
Teléfono para notificación 1: 3176554145  
Teléfono para notificación 2: 3153315748  
Teléfono para notificación 3: 6015087567

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 13 de enero de 2025 Hora: 09:19:16  
Recibo No. AA25033020  
Valor: \$ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A250330208AE7A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por Escritura Pública No. 0003081 del 26 de octubre de 2001 de Notaría 34 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de noviembre de 2001, con el No. 00802130 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada TORRES FERNANDEZ DE CASTRO & ASOCIADOS LTDA.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Escritura Pública No. 0002719 del 24 de septiembre de 2002 de Notaría 34 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 4 de octubre de 2002, con el No. 00847532 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de TORRES FERNANDEZ DE CASTRO & ASOCIADOS LTDA a TORRES FERNANDEZ DE CASTRO & ASOCIADOS LTDA PERO PODRA TAMBIEN GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL DE TFC CONSULTORES O DE TFC CONSULTORES LTDA.

Por Acta No. 2 de la Junta de Socios, del 1 de julio de 2014, inscrita el 18 de julio de 2014 bajo el número 01853015 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformo de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: TORRES FERNANDEZ DE CASTRO ABOGADOS S.A.S. SIGLA TFDC ABOGADOS S.A.S

Por Acta No. 2 del 1 de julio de 2014 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de julio de 2014, con el No. 01853015 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de TORRES FERNANDEZ DE CASTRO & ASOCIADOS LTDA PERO PODRA TAMBIEN GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL DE TFC CONSULTORES O DE TFC CONSULTORES LTDA a TORRES FERNANDEZ DE CASTRO ABOGADOS S.A.S.

Por Acta No. 1 del 28 de enero de 2021 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de febrero de 2021, con el No. 02663849 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de TORRES FERNANDEZ DE CASTRO ABOGADOS S.A.S a LEXIA ABOGADOS

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 13 de enero de 2025 Hora: 09:19:16  
Recibo No. AA25033020  
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A250330208AE7A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

S.A.S.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

La Sociedad tendrá como objeto principal la prestación de servicios jurídicos. También podrá realizar cualquier actividad comercial o civil económica lícita, tanto en Colombia como en el extranjero.

**CAPITAL**

\* CAPITAL AUTORIZADO \*

Valor : \$10.000.000,00  
No. de acciones : 1.000,00  
Valor nominal : \$10.000,00

\* CAPITAL SUSCRITO \*

Valor : \$10.000.000,00  
No. de acciones : 1.000,00  
Valor nominal : \$10.000,00

\* CAPITAL PAGADO \*

Valor : \$10.000.000,00  
No. de acciones : 1.000,00  
Valor nominal : \$10.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

Representación legal: la dirección y representación legal de la sociedad estará a cargo de un presidente.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 13 de enero de 2025 Hora: 09:19:16**

Recibo No. AA25033020

Valor: \$ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A250330208AE7A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Facultades del representante legal: el presidente, tendrá amplias facultades en la dirección y representación de la sociedad, con plena capacidad para obligar a la sociedad frente a terceros sin limitación alguna, ni por la cuantía, ni por la naturaleza del acto o contrato. Por lo tanto, se entenderá que el presidente podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El presidente se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos sociales, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el presidente. En ejercicio de sus facultades, le corresponde al presidente: a) representar a la sociedad como persona jurídica. B) dar el reglamento de la dirección y hacer los reglamentos internos de la sociedad. C) dirigir y controlar todos los negocios de la sociedad y delegar en otra persona o en cualquier empleado, las funciones que estime convenientes. D) crear y proveer los cargos que considere necesarios, señalarles sus funciones y fijarles sus remuneraciones. E) nombrar los asesores que estime convenientes y disponer, cuando lo considere oportuno, la formación de comités, integrados por el número de miembros que determine, para que asesoren a la sociedad en asuntos especiales, delegar en dichos comités las atribuciones que a bien tenga dentro de las que a ella corresponden, y señalarles sus funciones. F) determinar los porcentajes de depreciación, los deméritos y protección de activos, la amortización de intangibles, y las demás reservas que determine la ley o la asamblea general de accionistas. G) proponer a la asamblea general de accionistas, cuando lo juzgue conveniente, la formación de fondos especiales de reserva, previsión o de fondos para otros fines, o que determinados fondos especiales o los constituidos anteriormente, se trasladen o acumulen a otros fondos, se incorporen a la cuenta de pérdidas y ganancias o se capitalicen. H) presentar anualmente a la asamblea general de accionistas los estados financieros de propósito general, individuales y consolidados cuando fuere el caso, así como un informe de gestión y otro especial cuando se configure un grupo empresarial, en la forma y términos previstos en la ley, y un proyecto de distribución de utilidades. I) proponer a la asamblea general de



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 13 de enero de 2025 Hora: 09:19:16  
Recibo No. AA25033020  
Valor: \$ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A250330208AE7A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

accionistas las reformas que juzgue conveniente introducir a los estatutos sociales. J) proponer a la asamblea la fusión con otras sociedades, así como la transformación o escisión de la sociedad. K) autorizar la adquisición de otras empresas o establecimientos de comercio. L) determinar para cada ejercicio el presupuesto de inversiones, ingresos y gastos. M) dirimir las dudas que se presenten en la aplicación de las disposiciones estatutarias. N) ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea general de accionistas. O) cumplir los demás deberes que le señalen los reglamentos de la sociedad y los que le corresponden por el cargo que ejerce.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 1 del 28 de enero de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de febrero de 2021 con el No. 02663850 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Jose Fernando Torres Fernandez De Castro	C.C. No. 12613003

Por Acta No. 2 del 4 de julio de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de julio de 2024 con el No. 03141553 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Para Efectos Judiciales, Administrativos Y Sancionatorios	Daniela Bejarano Arroyo	C.C. No. 1067945287
Representante Para Efectos Judiciales,	Jaime Cardozo	C.C. No. 1098815294

## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de enero de 2025 Hora: 09:19:16  
Recibo No. AA25033020  
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A250330208AE7A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativos  
Y  
Sancionatorios

Representante Angie Carolina Vargas C.C. No. 1010231534  
Para Efectos Garcés  
Judiciales,  
Administrativos  
Y  
Sancionatorios

Por Acta No. 1 del 28 de enero de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de febrero de 2021 con el No. 02663850 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante	Torres Varela Juan	C.C. No. 1020727443
Legal Suplente	Felipe	
Representante	Jose Fernando Torres	C.C. No. 80199726
Legal Suplente	Varela	
Representante	Ana Maria Varela	C.C. No. 39032041
Legal Suplente	Gonzalez	
Representante	Jose Fernando Torres	C.C. No. 12613003
Para Efectos	Fernandez De Castro	
Judiciales, Administrativos Y Sancionatorios		
Representante	Torres Varela Juan	C.C. No. 1020727443
Para Efectos	Felipe	
Judiciales, Administrativos Y Sancionatorios		
Representante	Ruiz Esquivel Ana	C.C. No. 1144165861
Para Efectos	Cristina	

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 13 de enero de 2025 Hora: 09:19:16  
Recibo No. AA25033020  
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A250330208AE7A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Judiciales,  
Administrativos  
Y  
Sancionatorios

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 001 del 29 de marzo de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de mayo de 2024 con el No. 03117209 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	GRUPO AYCON SAS	N.I.T. No. 900446160 1

Por Documento Privado del 6 de mayo de 2024, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de mayo de 2024 con el No. 03120625 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Karen Lizeth Moreno Portela	C.C. No. 1014225003 T.P. No. 242581-T
Revisor Fiscal Suplente	Dahanna Alexandra Leguizamon Cendales	C.C. No. 1022406870 T.P. No. 243442-T

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0002719 del 24 de septiembre de 2002 de la Notaría 34 de Bogotá D.C.	00847532 del 4 de octubre de 2002 del Libro IX
Acta No. 2 del 1 de julio de 2014 de la Junta de Socios	01853015 del 18 de julio de 2014 del Libro IX
Acta No. 1 del 28 de enero de 2021	02663849 del 18 de febrero de

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 13 de enero de 2025 Hora: 09:19:16  
Recibo No. AA25033020  
Valor: \$ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A250330208AE7A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
de la Asamblea de Accionistas 2021 del Libro IX  
Acta No. 2 del 4 de julio de 2024 03135963 del 8 de julio de  
de la Asamblea de Accionistas 2024 del Libro IX

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 6910

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 3.823.083.755

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6910

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 13 de enero de 2025 Hora: 09:19:16  
 Recibo No. AA25033020  
 Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A250330208AE7A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 9 de febrero de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 23 de julio de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la  
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

[illegible]

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de enero de 2025 Hora: 09:19:16

Recibo No. AA25033020

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A250330208AE7A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a  
[www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la  
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera  
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\*\*\*

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la  
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y  
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

  
CONSTANZA PUENTES TRUJILLO